

**ORDEN****Exp.: P/SER-036564/2020**

De conformidad con lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes:

Acordar el inicio y ordenar la tramitación del expediente de contratación de servicios denominado **“ASEGURAMIENTO DE LOS RIESGOS DE DAÑOS MATERIALES Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL/GENERAL POR USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID”** 2 LOTES, promovido por la Dirección General de Patrimonio y Contratación, cuyo presupuesto de licitación asciende a 39.450,87 euros con el siguiente desglose :

Lote 1 Daños materiales:	30.785,20 euros
Lote 2 Responsabilidad civil patrimonial /general por uso y explotación de bienes inmuebles	8.665,67 euros

Se justifica su necesidad por los siguientes motivos:

Los bienes públicos constituyen un recurso esencial para la prestación de los servicios públicos y el desarrollo de las funciones y competencias que corresponden a toda Administración Pública.

La protección y defensa de su patrimonio por parte de las Administraciones Públicas constituye una auténtica obligación legal recogida en el artículo 28 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Dentro del patrimonio de la Comunidad de Madrid los bienes inmuebles revisten una especial relevancia tanto desde un punto de vista funcional como económica y su tenencia y explotación conlleva la asunción de importantes responsabilidades frente a terceros.

De acuerdo con el artículo 16.1 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid “los bienes muebles e inmuebles se podrán asegurar mediante la póliza correspondiente cuando, previa valoración y estudio económico, se considere conveniente y así lo acuerde la Consejería, Organismo Autónomo, Entidad de Derecho público o Ente Público interesados”.

Por su parte, conforme al artículo 17.1.k) del Decreto 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública (BOCM núm. 253 de 24 de octubre de 2019) corresponde a esta Dirección General de Patrimonio y Contratación “el aseguramiento de los riesgos derivados de la tenencia, uso y explotación de los bienes inmuebles adscritos a la Consejería de Hacienda y Función Pública.”

En el ejercicio de la citada competencia y por considerarlo, en los términos exigidos por el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, necesario e idóneo en orden a proteger los intereses patrimoniales y económicos que derivan del uso y titularidad de bienes inmuebles se plantea la contratación de un servicio de aseguramiento de los riesgos de daños materiales y de responsabilidad civil patrimonial/general por uso y explotación de los bienes inmuebles adscritos a la Consejería de Hacienda y Función Pública.

La administración de ese servicio de aseguramiento se llevará a cabo a través de una empresa de mediación de seguros privados. Actualmente ese servicio es prestado por UNITECO PROFESIONAL CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L con C.I.F. B-79325395 e inscrito en la Dirección General de Seguros con la clave J-0664, la cual ha sido contratada por parte de la Consejería de Hacienda y Función Pública para prestar el servicio de “Asesoramiento y Mediación de seguros privados”.



La necesidad y conveniencia de contar con este servicio de aseguramiento, se plantea en los términos y condiciones que se recogen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, respecto a los inmuebles adscritos a la Consejería de Hacienda y Función Pública, cualquiera que sea el derecho que ostente la Comunidad de Madrid sobre los mismos y su destino y uso, así como los bienes cualquiera que sea su clase, naturaleza, material y descripción que, por razón de la

actividad asegurada, se encuentren dentro de los recintos de los bienes asegurados, en sus proximidades para el servicio de las mismas o en otros lugares adscritos operacionalmente a las dependencias, y sobre los cuales tenga título de propiedad u otro interés asegurable y/o sobre los que ostente su uso y disfrute, ya sea en concepto de cesión o por cualquier otro título.

A través de este servicio se persigue proteger a la Consejería de Hacienda y Función Pública de las consecuencias económicas que se pueden derivar para la misma por:

- a) Daños materiales, siendo objeto de cobertura, entre otros, siniestros derivados de incendio, explosión, caída del rayo, inundación, daños por agua, actos vandálicos, maliciosos o malintencionados, acciones tumultuarias y huelgas, lluvia, viento, pedrisco y/o nieve, daños por humo, daños en aparatos eléctricos, rotura de cristales, etc, así como otro tipo de perjuicios como los daños ocasionados por la ocupación ilegal por terceros.
- b) Responsabilidad civil patrimonial en que incurra frente a terceros como consecuencia de la titularidad y/o uso de inmuebles

Cada uno de estos conceptos (daños y responsabilidad civil patrimonial) se contratará en lotes independientes que, aunque podrán adjudicarse a la misma o a diferente empresa aseguradora, constituirán un contrato (póliza) independiente.

El contrato de seguro se regula a través de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, la cual lo define en su primer precepto como “aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.

Estos contratos de servicios de carácter privado, en los términos de lo dispuesto por el artículo 26.2 párrafo segundo de la citada Ley, se rigen, en cuanto a su preparación y adjudicación, por el Libro Primero (“Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos”) y Libro Segundo (“De los contratos de las Administraciones Públicas”) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y, en cuanto a sus efectos y extinción, por las normas de derecho privado, que en el presente contrato supone la aplicación de la Ley 50/1980, de 8 de octubre.

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA  
P.D. Orden 06/07/2020, BOCM 16/07/2020  
EL DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

